

Los que se fueron . . .

A nivel mundial

El número de migrantes internacionales pasó de 75 millones en 1965 a 120 millones en 1990. Es decir, aumentó a una tasa anual del 1,9%, un poco superior a la del crecimiento de la población mundial, que fue del 1,8%. La tasa de crecimiento del número de migrantes ha aumentado, pasando del 1,2% en los años sesenta a 2,6% a finales de los ochenta a nivel mundial. La información disponible de la ronda de censos del 2000 sugiere que el aumento ha seguido acelerándose. La División de Población estima que, en el año 2000, había entre 150 y 200 millones a nivel mundial, ello supondría una tasa de crecimiento de entre el 2,3 y el 5,1% de 1990 al 2000.

En cuanto a una posible diversificación de orígenes y destinos, la información disponible indica que los inmigrantes se reparten de forma más equilibrada a nivel global: mientras que en 1965 los inmigrantes eran más del 15% de la población nacional en sólo 12 países, en 1990 el número de países con una proporción significativa de inmigrantes había pasado a 26. Al mismo tiempo, mientras que la mayoría (es decir, el 90%) de inmigrantes se repartían entre 32 países, en 1990 había que contar 51 países para incluir al 90% de inmigrantes.

Es importante señalar que el número de turistas a nivel mundial se ha multiplicado por 7 en los últimos 30 años. Se estima que un porcentaje no desdenable de estos turistas entran en los

países receptores por razones de trabajo, especialmente en Europa tal como lo afirma Marta Roig.

La globalización y las tendencias del pasado en América Latina y el Caribe²

Entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX la inmigración de ultramar fue intensa en varios países, aunque fluctuante en el tiempo, y ejerció una decisiva incidencia –cuantitativa y cualitativa– en la configuración de las sociedades nacionales, especialmente en las naciones de la vertiente atlántica, que poseían condiciones favorables para la inserción social y económica de personas migrantes, en su mayoría provenientes del sur de Europa y en menor medida del Cercano Oriente y Asia. En particular, la inmigración europea se manifestó con singular fuerza en las zonas más integradas a los circuitos económicos internacionales que –amén de disponer de “espacios vacíos”– experimentaron un rápido proceso de modernización productiva; esta expansión económica conllevó la generación de empleos con salarios superiores a los imperantes en los países de Europa meridional, hecho que contribuyó tanto a incentivar la atracción migratoria como a facilitar una rápida movilidad social ascendente. De los 11 millones de europeos, 38% de ellos eran italianos, 28% españoles y 11% portugueses, arribados a la región en el período mencionado; la mitad se asentó en Argentina y más de un tercio en Brasil (Pellegrino, 2001).

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de su exclusiva responsabilidad y pueden no coincidir con las de la Organización. Caracas, Octubre de 2002.

y los que se van

América Latina y el Caribe, una región de tradicional atracción migratoria, se transformó en fuente de emigración a lo largo de los últimos decenios y la geografía de destinos de los flujos se ha ido ensanchando de manera progresiva. Se estima que casi 20 millones de latinoamericanos y caribeños viven fuera de su país de nacimiento; esta cifra equivale a poco más del 13% de los 150 millones de migrantes internacionales en el mundo (IOM-United Nations, 2000).

La mitad de los emigrantes regionales emigró durante el decenio de 1990, en especial a los Estados Unidos; en el mismo lapso emergieron nuevos flujos –de magnitud menor, pero con una expansión sin precedentes– dirigidos a Europa. La migración intrarregional, que acompañó las distintas etapas del desarrollo de los países de América Latina y el Caribe, mantiene algunos de sus rasgos tradicionales, pero registra una menor intensidad, asociada en parte a la retracción del carácter atractivo de los principales países de destino (Argentina y Venezuela) (CEPAL, 2002).

En el conjunto de la emigración intrarregional latinoamericana alrededor de 1990, los colombianos registraron la mayor magnitud absoluta: algo más de 600 mil fueron empadronados en los censos de otros países latinoamericanos (90% en Venezuela). Los emigrantes chilenos y paraguayos, con totales cercanos a las 280 mil personas (tres cuartas partes censadas en Argentina), compartían el segundo lugar entre los emigrantes intra lati-

noamericanos. No obstante su magnitud absoluta, estas cifras representaban –salvo en Paraguay– menos del 3% de las poblaciones de los respectivos países de origen; mención aparte merece la emigración uruguaya –principalmente a Argentina–, que a comienzos del decenio de 1970 alcanzó una intensidad similar a la de la mortalidad en el país de origen (Fortuna y Niedworok, 1985). En Centroamérica, la emigración intrarregional tiene gran significación en los casos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

¿Cómo son?. Perfiles y repercusiones de la migración de latinoamericanos y caribeños

“Los antecedentes reunidos por el Proyecto IMILA muestran que, además de su magnitud creciente, la migración internacional de latinoamericanos y caribeños, tanto entre los países de la región como hacia el resto del mundo, experimentó cambios cualitativos, que se reflejan, por ejemplo, en su composición según sexo y en la participación de personal calificado entre los migrantes insertos en la fuerza de trabajo. En buena medida, tales cambios encuentran su explicación en las persistentes tensiones económicas experimentadas por los países de la región; estas tensiones, profundizadas por la prolongada crisis de la “década perdida” de 1980 y los efectos inmediatos de los programas de ajuste estructural, repercutieron sobre el funcionamiento de los mercados de trabajo. No menos

importante fue el impacto de las serias convulsiones del escenario sociopolítico que, en algunos casos, resultaron en la militarización de los conflictos y en la ruptura de las normas de convivencia civil. Las modificaciones en las disposiciones normativas de los países de destino también pueden haber incidido en los cambios de la composición de los migrantes; la rigurosa aplicación de normas restrictivas de ingreso y permanencia parece haber dado mayor visibilidad a los fenómenos de “indocumentación” y a que algunos movimientos de tipo itinerante y recurrente se convirtiesen en traslados de carácter definitivo (acarreado consigo un incremento de la práctica de reunificación familiar en los países de destino). Además de sus rasgos cualitativos, los patrones de migración de latinoamericanos y caribeños entrañan repercusiones de gran importancia y una de ellas es la transferencia de un caudal importante de recursos financieros, fenómeno que cobra vigencia en las “remesas.”

El examen de los índices de masculinidad de los migrantes regionales en todo el continente americano permite advertir el paso de una situación de predominio femenino en 1970 y 1980 a otra de mayoría masculina en 1990; en cambio, la migración intrarregional acusa una sostenida “feminización”. Esta aparente paradoja es imputable al aumento del índice de masculinidad del stock de inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos, que refleja básicamente

el efecto de las corrientes más numerosas (especialmente la originada en México), puesto que la mayoría de los flujos restantes presenta un predominio femenino.

De acuerdo con los datos reunidos por IMILA, el número total de técnicos, profesionales y afines que integran el stock de migrantes regionales en el continente se duplicó entre 1970 y 1980, involucrando 220 mil personas; en el decenio siguiente la magnitud absoluta del aumento fue algo menor, pues su total llegó a poco más de 300 mil efectivos en 1990, dos tercios de los cuales se encontraban en los Estados Unidos. Como resultado, la proporción de personal calificado entre los migrantes económicamente activos a escala continental disminuyó de 8% en 1970 a 6% en 1990; esta declinación fue aún más marcada entre los latinoamericanos censados en los Estados Unidos. Distinta fue la situación en el patrón migratorio intrarregional, puesto que la participación de profesionales, técnicos y afines aumentó de 6% a 8% de los migrantes económicamente activos entre 1970 y 1990 (en valores absolutos, el número de estas personas se triplicó en esos veinte años). Es probable que el carácter masivo que adquirió la emigración a los Estados Unidos durante el decenio de 1980 haya repercutido en la declinación relativa del personal calificado; con todo, cabe anotar dos observaciones: a) en este país siempre han existido dificultades para una inserción laboral de los latinoamericanos y caribeños acorde con el grado de calificación; y b) la magnitud absoluta del personal calificado regional es muy importante para las disponibilidades nacionales en varios países (Pellegrino y Martínez, 2001). A su vez, el hecho de que el personal calificado sea una fracción creciente de las personas que migran entre los países de la región latinoamericana es importante, puesto que contribuye a

valorizar este patrón migratorio y pone en entredicho la percepción de que tales migrantes carecen de suficiente capacitación; además, esta tendencia es un estímulo poderoso para diseñar esfuerzos de cooperación en el empleo compartido de los recursos humanos, particularmente en el marco de los esquemas de integración subregional.

Como ocurre con la dimensión de género, la composición de las corrientes migratorias específicas se distingue por una gran heterogeneidad. Así, entre los inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos, los porcentajes de profesionales, técnicos y afines entre las personas procedentes de América del Sur duplican los que registran las corrientes provenientes de México y algunos países caribeños y centroamericanos. Un distingo similar se aprecia en Argentina y Venezuela cuando se contrasta la proporción relativamente baja de personal calificado en las corrientes voluminosas procedentes de las naciones limítrofes (salvo Uruguay) con la que se advierte en las corrientes originadas en el resto de América Latina. En general, se observa que la participación relativa de profesionales, técnicos y afines tiende a ser menor en los países de elevada emigración, con excepción de Cuba y Uruguay; por el contrario, los emigrantes de las naciones latinoamericanas de alta inmigración (Argentina y Venezuela) se distinguen por un elevado grado de selectividad (en favor del personal calificado). Este último rasgo también se aprecia en el caso de la migración entre los países de la Comunidad del Caribe, donde destaca la corriente recibida por Jamaica, en la que algo más de la mitad de los inmigrantes son profesionales y técnicos (Mills, 1997). En promedio, el nivel de educación de los migrantes intracaribeños de habla inglesa supera el de las poblaciones de origen y destino; por ejemplo, en

Antigua, Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas la proporción de inmigrantes del resto de la Comunidad que cuentan con estudios universitarios supera en más de dos veces aquella de la población nacional, y en Barbados esa relación es de más de siete veces (Thomas-Hope, 2000).

El impacto de los que se fueron: el caso de las remesas

Las repercusiones de la migración internacional son múltiples y se hacen sentir en los diversos planos de la realidad social, económica y cultural. Así, en varios países de América Latina y el Caribe este fenómeno parece haber contribuido a aliviar el impacto de las tensiones entre las tendencias demográficas y la generación de empleo, de las originadas en conflictos sociopolíticos, étnicos y religiosos, y de las asociadas con formas agudas de degradación ambiental; a escala individual, la emigración constituye una opción para la búsqueda de oportunidades laborales y de formación personal no disponibles en los países de origen. Sin embargo, en el otro platillo de la balanza, la hipótesis de la "válvula de escape" se confronta con la erosión de recursos humanos, que puede tener consecuencias adversas para el desarrollo económico y social de los países de origen. A ello se añaden los problemas de la indocumentación, resultantes de la aplicación de las normas legales nacionales que rigen el ingreso y permanencia de las personas, y que pueden enrarecer las relaciones entre los países de origen y destino de los migrantes. Además, en el plano individual, la emigración puede ser fuente de vulnerabilidad, frustración y trato discriminatorio. Asimismo, es sabido que en algunos países receptores cobran fuerza las percepciones negativas frente a los costos de la utilización que hacen los inmigrantes de

servicios sociales subsidiados (salud, educación, seguridad social) o respecto de la competencia "desleal" por puestos de trabajo; con todo, tales países derivan beneficios de la inmigración, como la oferta continua de mano de obra barata o el aprovechamiento de personal altamente calificado, sin que ello implique asumir los costos de su capacitación.

Otra repercusión de la migración es la conformación de redes y comunidades migratorias. Aunque la existencia de organizaciones de migrantes no es algo nuevo en los países receptores –pues se sabe que las asociaciones acompañaron la llegada de los flujos de inmigrantes de ultramar–, en los últimos años adquirieron notoria visibilidad entre los latinoamericanos y caribeños presentes en los Estados Unidos. Varios estudios destacan el carácter transnacional de las comunidades y las conciben como nuevas formas de identidad que viabilizan el relacionamiento continuo y sostenido de los migrantes con sus áreas de origen, facilitan la acumulación de capital social (Portes, 1997), y generan impulsos retroalimentadores de los flujos migratorios. La condición transnacional de las comunidades se reafirma por el hecho de que su operación traspasa las fronteras políticas y culturales (Canales y Zolniski, 2000), definiendo una geografía reticulada de interacciones. Estas comunidades configuran, en buena medida, el ámbito de la reproducción social de los migrantes, ya que en ellas se materializan expresiones solidarias de diverso tipo y se produce una intensa difusión cultural que comprende danzas, formas plásticas, artesanías, gastronomía y festividades latinoamericanas y caribeñas. Su papel es bastante complejo, ya que potencian la transferencia de remesas colectivas y cumplen un papel central en la acción afirmativa de los propios migrantes frente a las prácticas de rechazo social

que les afectan en las sociedades de destino (CEPAL, 2002).

Las observaciones precedentes sirven de marco de referencia para comprender el papel de las remesas. La emigración –además de abrir la posibilidad para establecer vínculos favorables a la incorporación de tecnología y la inversión productiva en los países de procedencia– aporta también una fuente de divisas para los países, comunidades y familias de origen. Una estimación de la CEPAL, basada en las series de la balanza de pagos de los países, ubica el monto total de las remesas transferidas por los emigrantes a América Latina y el Caribe en unos US\$ 18.000 millones en el 2000 (más de un tercio se dirigieron a México). Como muestra de su importancia, la tasa media anual de crecimiento de dichos ingresos durante los años noventa fue mayor al 13%, superando el 20% en Ecuador, Honduras, Nicaragua y Perú (CEPAL, 2002). Con relación al impacto macroeconómico de las remesas, puede señalarse que en las economías de El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador y Jamaica representan entre el 8% y el 14% del PIB (y equivalen al 48% del valor de las exportaciones salvadoreñas) (CEPAL, 2002).

Samuel (2000) sostiene que las remesas pueden concebirse como parte de un arreglo contractual diferido en el tiempo, que confiere beneficios al migrante y al hogar en el país de origen. Tal arreglo involucra la inversión que la familia efectúa en uno de sus miembros –cuando afronta los costos de su educación– con la expectativa de que su migración permitirá obtener una compensación mediante las remesas; se trata de una inversión de riesgo, cuya incertidumbre disminuirá en la medida en que ese miembro migre. Los estudios de la CEPAL (2000b) en Centroamérica revelan que la mayor parte de las remesas se

destina al consumo de las familias, aunque también al mejoramiento de la vivienda y la compra de tierras y capital de trabajo; por ende, las remesas juegan un papel importante en el sostenimiento de las familias. Dado este fuerte énfasis en el consumo, muchas veces se desestima el impacto económico y social que estas transferencias tienen más allá del ámbito familiar (Torres, 2000). Sin duda que si este consumo fuese únicamente superfluo, el aporte al desarrollo sería escaso, pudiendo propiciar la dependencia de los hogares (y las comunidades locales) respecto de una fuente de ahorro externo, cuya estabilidad (regularidad en los montos y continuidad temporal de los flujos) no está garantizada. En cambio, si estos recursos se emplearan para costear una educación de mayor calidad, mejorar la salud o elevar el nivel de vida y de la productividad, la contribución de las remesas al desarrollo sería significativa.

La información sobre el uso de las remesas familiares no es sistemática y presenta ambivalencias; con todo, los más recientes estudios realizados en México (1999) y República Dominicana (1997) muestran que la proporción destinada a inversión varía entre 15% y 23% del total de los recursos enviados por los emigrantes a sus familias de origen. Si la última cifra se toma como referencia para los cinco países antes individualizados, se obtiene una estimación del monto global de la inversión de casi US\$ 1.400 millones en 1999, magnitud similar a la que los fondos de inversión social asignaron ese año en infraestructura social (Torres, 2000). Dada la gran cuantía de recursos movilizados por las remesas familiares, en algunos estados de México se crearon instrumentos de inversión local, que se emplean para financiar obras de infraestructura y proyectos productivos dirigidos a retener población en

zonas de fuerte emigración; dichos instrumentos son mecanismos de financiación compartida, pues se nutren de aportes de las agencias de intermediación financiera (con cargo a una parte de las utilidades que obtienen en el envío de las remesas), de los mismos estados y de los propios emigrantes. En República Dominicana se han establecido programas orientados al fomento de obras comunitarias y microempresas con la participación de las familias receptoras de remesas. Además de las remesas familiares, hay otras de naturaleza colectiva, habitualmente reunidas por las asociaciones de emigrantes con el objeto de financiar obras comunitarias en los lugares de origen. Para potenciar el efecto de estas inversiones, en México se creó un mecanismo de financiación en el que participan tanto los emigrantes como los niveles central, estatal y municipal del sector público (CEPAL, 2000b y 2002). Más allá de las iniciativas orientadas a facilitar el envío de remesas y fomentar su utilización en inversiones productivas, un tema complejo de estas transferencias es su incidencia sobre los patrones de distribución de ingreso. Como afirma Samuel (2000), si el supuesto teórico de que las remesas son mayores para los hogares pobres fuese efectivo, una consecuencia lógica de su flujo sería una mejora en la distribución del ingreso. No obstante, los antecedentes disponibles –si bien insuficientes– no permiten validar tal supuesto. Dado que la propensión migratoria parece más alta entre los grupos no pobres, y que el monto de las remesas guarda relación estrecha con la posición en la ocupación en la sociedad de destino, es probable que estas transferencias no contribuyan a un mayor grado de equidad socioeconómica en los países de origen; esta apreciación parece encontrar su corroboración en el hecho de que, durante los años noventa, la desigualdad en la distribu-

ción del ingreso y la pobreza aumentaron en varios países que recibieron importantes flujos de remesas y que registran los menores índices de gasto social per cápita. En suma, es claro que el debate acerca de los efectos de las remesas –y, en general, de la migración– sobre la distribución del ingreso, la pobreza y el bienestar todavía está lejos de cerrarse. No menos claro es que las iniciativas dirigidas a propiciar un uso productivo de las remesas se deben entender como complementarias de los esfuerzos de desarrollo de los países; además, tales iniciativas deben resguardar el pleno respeto de las decisiones de las personas involucradas (CEPAL, 2002).

El futuro de la emigración internacional

Las tendencias descritas muestran que la región ha perdido su atractivo como lugar de destino y que se ha transformado en expulsor de la población nativa y de aquellos que habiendo nacido en otras regiones se habían residenciado en la nuestra.

Las actuales condiciones de apertura de las economías en nuestros países, sumado a las crisis económicas, sociales y políticas en algunos países, amplían las brechas entre las sociedades y la propensión emigratoria, tenderá a aumentar, en el corto y mediano plazo.

Actualmente, existen dos procesos de concertación regional, la Conferencia Regional sobre Migración, instancia de consulta y comunicación en la que participan los países de América del Norte y Centroamérica; y la Conferencia Suramericana, que reagrupa a los 12 países del sur del continente.

Los países del Caribe insular no tienen, hasta el momento, un tipo de organización similar. Es importante colaborar con dichos países para poder crear un mecanismo de concertación y cooperación entre ellos. El

Sistema Económico Latinoamericano (SELA) está en la mejor disposición para colaborar en ese impulso.

Si bien la región se encuentra en pleno proceso de discusión de la liberalización económica en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Asociación de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el tema de desplazamiento de población no está contemplado, salvo en la OMC para la migración calificada.

Gabriel Bidegain

Coordinador de Cooperación Internacional del Sistema Económico Latinoamericano (SELA)